Los religiosos secularizados en forma, tienen derecho a percibir pensión alimenticia, con cargo a las rentas de sus Conventos, mientras no obtengan su congrua sustentación, conforme a las Sinodales del Obispado respectivo.

Recurso de nulidad interpuesto por el doctor don Germán Leguía y Martínez, en la causa que sigue con el Convento de la Buenamuerte sobre cantidad de soles. — Procede de Lima.

DICTAMEN FISCAL

Excmo. señor :

Los religiosos de la Buenamuerte secularizados en 1891, presbíteros don Antonio y don Alfonso Cadillo, han cedido al doctor don Germán Leguía y Martínez el crédito por las pensiones devengadas desde la exclaustación, y el cesionario ha demandado el pago al Convento, alegando que según los decretos de 12 de abril y 19 de agosto de 1873, tienen derecho los referidos presbíteros a una pensión de veinte soles mensuales cada uno, por no haber obtenido capellanía ni beneficio que les proporcionara su subsistencia.

El apoderado del Convento ha contestado que los ex-religiosos Cadillo no tienen derecho a pensión alguna, porque los decretos citados por ellos, se refieren a los frailes que por la reforma hecha de acuerdo con el Delegado Apostólico, Excmo. señor Vanutelli, el año de 1871 hubieren salido del Convento, mas no a los que posterior-

mente y por motivos distintos solicitaren y obtuvieren su exclaustación.

El Juez de primera instancia doctor Morote ha declarado en la sentencia de fojas 43, que es fundada la acción y que el Convento está obligado a pagar al doctor Leguía y Martínez la cantidad de dos mil ciento sesenta soles; pero el Superior ha revocado ese fallo por el de vista de fojas 67, por cuanto los decretos de abril y agosto de 1873, sólo conceden a los seculares exclaustados en la época de la reforma, aprobada en 1872, una pensión, pero no a los religiosos que obtengan la secularización por otros motivos; que los presbíteros Cadillo que profesaron después de realizada la reforma y se han exclaustado mucho después, sin conseguir en los decretos que les acuerdan ese cambio de condición ningún beneficio, no tienen derecho a la pensión que reclaman; y, en fin, que no estando probada la acción se declara ésta sin lugar y absuelto de ella al referido Convento de la Buenamuerte.

En concepto del Fiscal, está arreglado a ley el fallo de vista, porque del texto de los citados decretos de abril y agosto de 1873, en que se apoya la demanda, no aparece la obligación impuesta al Convento de la Buenamuerte de pagar una pensión a todos los religiosos que se exclaustren, sino a los que por razón de la reforma aprobada en 1872 hubiesen tenido que secularizarse; y como los presbíteros don Antonio y don Alfonso Cadillo se han separado del Convento muchos años después de la reforma y no por motivo de ella, sino de salud u otros que en sus respectivos escritos a la autoridad eclesiástica aparecen, y esto sin que hubiera intervenido el Ordinario, razón por la cual no consintió en que obtuvieran be-

neficios, concluye este Ministerio, que puede declarar VE. no haber nulidad en el fallo que motiva el recurso extraordinario, salvo mejor acuerdo.

Lima, 27 de mayo de 1898.

Gálvez.

RESOLUCIÓN SUPREMA

Lima, agosto 24 de 1898.

Vistos; con lo expuesto por el señor Fiscal; y considerando: que el artículo 15 del Reglamento de Regulares de 28 de setiembre de 1826 prescribe, que los religiosos, que en forma se secularicen, sin gozar de la respectiva congrua sustentación sinodal, sean precisamente destinados al servicio de alguna parroquia, hasta tanto sean promovidos a beneficios eclesiásticos; mandato que se ratificó por los supremos decretos de 10 de julio de 1829 y 28 de abril de 1830: — que a pesar de tan terminantes disposiciones, el Muy Reverendo Arzobispo se negó a conferir beneficio alguno eclesiástico ni encargo de cura de almas, como interés de parroquia a los religiosos exclaustrados del Convento de la Buenamuerte de esta Capital, don Antonio y don Alfonso Cadillo, según aparece del oficio corriente a fojas 32: — que en tal situación es obligación del mencionado Convento acu-

dir a los expresados con la pensión mensual de veinte soles a cada uno, mientras se les proporcione algún beneficio o destino parroquial, como lo establece el Supremo decreto de 12 de abril de 1873; el cual no se refirió únicamente a los regulares que motivaron esa resolución, sino que según su texto literal comprende también a todos los que se hallen en el caso de aquellos: — que el carácter general de ese decreto supremo se confirma por las resoluciones gubernativas de 6 de marzo y 25 de mayo de 1878, que reconocieron el derecho de los religiosos exclaustros en forma, para percibir pensión alimenticia con cargo a las rentas de sus Conventos, mientras no obtengan su congrua sustentación, conforme a los sinodales del respectivo Obispado: — que tales disposiciones se hallan de acuerdo con el decreto expedido el 30 de diciembre de 1870 por el Muy Reverendo Arzobispo de Lima, sobre el percibo de esas pensiones alimenticias y también con la disciplina de la Iglesia, que exige gocen todos los ordenados de los medios de subsistencia, para que puedan observar las reglas canónicas, que les prohíben dedicarse con ese fin a otra clase de ocupaciones: declararon *haber nulidad* en la sentencia de vista, de fojas 67, su fecha 26 de abril último, y reformándola, confirmaron la de primera instancia de fojas 43, su fecha 12 de mayo del año último, que declara fundada la demanda interpuesta por el doctor Germán Leguía y Martínez, cesionario de los mencionados religiosos, y manda que el Convento de la Buenamuerte le pague en el término de ley la suma de dos mil ciento sesenta soles, importe de las mesadas adeudadas desde la fecha de la secularización de aquéllos hasta la fecha de la cesión del

crédito, con los intereses legales desde la notificación con la demanda el 26 de marzo de 1896; y los devolvieron.

Vélez. — Espinosa. — Elmore. — Jiménez. — Ortiz de Zevallos.

Se publicó conforme a ley.

Luis Delucchi.

Causa N° 137. — Año 1898.

Prescripción de capellanía.

Recurso de nulidad interpuesto por don José Lucas Pacheco Larrauri y hermanos en la causa que siguen con el doctor don Melchor Moya sobre devengados de una capellanía. — Procede del Cuzco.

DICTAMEN FISCAL

Excmo. señor:

El representante de don José Lucas Pacheco Larrauri y hermanos ha dicho de nulidad del fallo de vista de fojas 234, confirmatorio del apelado de fojas 150 vuelta, en que el juez de primera instancia del Cuzco declaró fundada la acción del Canónigo doctor don Mel-